



REPUBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLIN
SALA QUINTA DE DECISION

Proceso:	Ordinario Laboral
Radicación:	05001-31-05-015-2019-00390
Demandante:	Fermín Antonio Gómez Pabón
Demandado:	Colpensiones
Asunto:	Apelación Sentencia
Procedencia:	Juzgado Quince Laboral del Circuito de Medellín
Magistrada ponente:	Sandra María Rojas Manrique
Tema:	Pensión invalidez condición más beneficiosa

Medellín, febrero quince (15) de dos mil veintitrés (2023)

En fecha, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, integrada por los magistrados CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES, VICTOR HUGO ORJUELA GUERRERO y SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE como magistrada ponente, procede, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, a decidir el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte actora, respecto de la sentencia proferida por el Juzgado Quince Laboral del Circuito Medellín, el 10 de octubre de 2022, dentro del proceso ordinario laboral instaurado por el señor FERMIN ANTONIO GÓMEZ PABÓN en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES. Radicado 05001-31-05-015-2019-00390-01.

1.- ANTECEDENTES

1.1.- DEMANDA

El señor FERMIN ANTONIO GÓMEZ PABÓN, llamó a juicio a COLPENSIONES, pretendiendo el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez de origen común, bien sea en virtud del principio de la condición más beneficiosa, o en subsidio, por la modificación de la fecha en que se estructuró el estado de invalidez, o aquella en que perdió su capacidad laboral en forma permanente y definitiva; se condene al reconocimiento de los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, o en subsidio la indexación.

En respaldo de tales pedimentos se expuso, que el señor Fermín Antonio Gómez Pabón, fue calificado por medicina laboral de Colpensiones con el 55% de pérdida de capacidad laboral estructurada el 29 de julio de 2016 a través de dictamen N° 2016171408KK del 21 de agosto de 2016, que el 9 de septiembre de 2016 solicitó a Colpensiones el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, prestación que le fue negada mediante acto administrativo SUB 300982 del 12 de octubre de 2016, por no acreditar 50 semanas dentro de los tres años anteriores a la fecha de estructuración del estado de invalidez, oportunidad en la cual se analizó también la prestación bajo el principio de la condición más beneficiosa, concluyendo que no era posible aplicarla.

Se narró que contra la decisión anterior se presentaron los recursos de reposición y en subsidio apelación, procediendo Colpensiones mediante las resoluciones GNR 356192 del 2016 y VPB 1292 de 2017, a confirmar el acto objeto de recurso. Finalmente, se adujo que el actor cotizó 371.57 semanas, acreditando los requisitos para una pensión de invalidez conforme las disposiciones del Decreto 758 de 1990, destacando que, la fecha de estructuración que le fue dictaminada no representa el momento en que el mismo perdió su capacidad laboral en forma permanente y definitiva, pues fue desde el accidente padecido que se vio imposibilitado para laborar.

1.2.- CONTESTACIÓN

Colpensiones al dar respuesta a la demanda, señaló que no le consta lo relacionado con el número de semanas cotizadas por el accionante y que el mismo acredite los requisitos para acceder a la pensión de invalidez bajo los parámetros del Decreto 758 de 1990, tampoco le consta que la fecha de estructuración que le fue determinada al actor, no represente o no esté acorde con el momento en que el mismo perdió su capacidad laboral y aceptó como ciertos los demás hechos.

En oposición al éxito de las pretensiones, formuló las excepciones de: inexistencia de la obligación; cobro de lo no debido; falta de causa en las pretensiones de la demanda y falta de acreditación de los requisitos legales para reconocer la pensión de invalidez; necesidad del equilibrio financiero; improcedencia de la indexación de las condenas; inexistencia de intereses moratorios; prescripción; buena fe de Colpensiones; imposibilidad de condena en costas y la excepción innominada.

1.3.- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Quince Laboral del Circuito de Medellín, pone fin a la primera instancia mediante sentencia proferida el diez (10) de octubre de dos mil veintidós (2022), por medio de la cual declaró que, el demandante, no cumple con los requisitos para el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, declarando probada la excepción de inexistencia de la obligación de reconocer y pagar pensión de invalidez y consecuentemente, absolvió a Colpensiones de todas las pretensiones, gravando en costas al actor.

1.4.- RECURSO

El apoderado del accionante interpone recurso de apelación, solicitando se tenga en cuenta que desde la primera diligencia el despacho negó la práctica de la prueba testimonial al considerarla no pertinente, se presentó recurso al respecto, pero el Despacho continuó considerando irrelevante las declaraciones y en audiencia se insistió al despacho que se practicarán el testimonio de al menos

dos personas, pero el despacho mantuvo en la negativa de la prueba, por lo que solicita al Tribunal se practique la prueba a fin de verificar las condiciones de vulnerabilidad del demandante, a efectos de dar aplicación a parámetros constitucionales para el estudio de la prestación, como lo es el test de procedencia de la sentencia SU 556 de 2019, providencia que no fue analizada correctamente.

Solicita igualmente, se tenga en cuenta que el demandante desde hace más de 25 años, ha tenido múltiples hospitalizaciones por su salud mental, es una persona con diagnóstico de esquizofrenia y trastorno afectivo bipolar, ha estado en tratamiento psiquiátrico, que no ha sido constante por su problema de alcoholismo y su poca adhesión a los medicamentos, es agresivo, con antecedentes de epoc, demencia, es desorientado en tiempo y espacio, vive con la mamá y dos hermanas, su vida laboral fue corta, pero acreditó 371 semanas hasta el año 1985 y desde un accidente padecido el 1 de agosto de 1987 sufrió un traumatismo craneoencefálico que le ocasionó mayores problemas de salud e impidió que continuara su vida laboral.

Adujo que contrario a lo decidido por el despacho, la Corte Constitucional en Sala plena, en atención a las personas en situación de vulnerabilidad, es decir aquellas que satisfacen las exigencias del test de procedencia establecido en la sentencia SU 556 de 2019, ha sostenido que resulta razonable y proporcionado interpretar el principio de la condición más beneficiosa, aplicando de manera ultractiva las disposiciones del Acuerdo 049 de 1990, en lo que respecta a la exigencia de la densidad de semanas cotizadas a pesar de que la condición de invalidez se hubiere configurado en vigencia de la Ley 860 de 2003.

Reitera la solicitud de que se tome una decisión teniendo en cuenta, en primer lugar, que el demandante tiene una pérdida de capacidad laboral claramente determinable desde el año 198,7 fecha en la cual no pudo ejercer ningún otro trabajo por sus condiciones de salud, situación que fue vista de largo por parte de Colpensiones y pobremente analizada por la Junta Regional de Calificación al momento de determinar la pérdida de capacidad labora, fijándose como fecha

de estructuración el año 2018, considerando que con base en la historia clínica, se puede modificar la fecha de estructuración y fijarla para esa fecha en que efectivamente pierde la capacidad de laborar, se aplique la normativa vigente para ese momento y se reconozca la pensión de invalidez

En segundo lugar, si no se modifica la fecha de estructuración, ruega que en virtud del principio más beneficiosa, se efectúe el reconocimiento de la pensión haciendo el salto normativo al Acuerdo 049, siendo claro que el demandante es sujeto de especial protección, no solo por tener un 70% de pérdida de capacidad laboral, es una persona con niveles de pobreza, vive en la zona rural del municipio de Itagüí, tiene una enfermedad congénita como es la meningitis y el trastorno afectivo, la esquizofrenia, que ha venido degenerando con el tiempo, es de la tercera edad, tiene 66 años, no tiene como satisfacer sus necesidades básicas.

1.5.- ALEGATOS DE SEGUNDA INSTANCIA

La apoderada de la parte actora solicita se revoque íntegramente la sentencia de primera instancia, insistiendo y reiterando los argumentos esbozados al momento de sustentar el recurso de alzada y reprochando adicionalmente, que pese a que de manera oportuna solicitó la complementación y aclaración del dictamen realizado por la Junta Regional, a efectos de si contradicción conforme los artículos 228 y 230 del Código General del Proceso, el despacho no emitió pronunciamiento alguno respecto de la petición.

Por su parte, la apoderada de Colpensiones solicita se acoja la sentencia de primer grado, teniendo en cuenta que la invalidez del accionante se estructuró en vigencia de la Ley 860 de 2003, no acreditándose el requisito de las 50 semanas cotizadas en los 3 años inmediatamente anteriores a la estructuración, no siendo posible tampoco en aplicación del principio de la condición más beneficiosa estudiar la prestación bajo el Decreto 758 de 1990, toda vez que debe darse aplicación a la normatividad directamente anterior a la que está en

vigencia a la ocurrencia de los hechos, que para este caso sería la Ley 100 de 1993.

2. CONSIDERACIONES

2.1.- COMPETENCIA DE LA SALA

Inicialmente, debe advertirse que la competencia de esta Corporación está dada por los puntos que son objeto de apelación, entendiendo que las partes quedaron conformes con los demás aspectos decididos; de conformidad con el artículo 57 de la Ley 2ª de 1984; los artículos 10 y 35 de la Ley 712 de 2001, que modificaron los artículos 15 y 66A del C.P.L y de la S.S., respectivamente.

2.2.- HECHOS NO DISCUTIDOS EN LA INSTANCIA

No hay controversia alguna en torno a los siguientes supuestos fácticos:

(I) Que el señor Fermín Antonio Gómez Pabón, nació el 23 de enero de 1956, tal y como se desprende de la copia de su cédula de ciudadanía, visible a folios 22 del anexo 01 expediente digitalizado.

(II) Que el demandante fue calificado por medicina laboral de Colpensiones, el 21 de agosto de 2016, con una pérdida de capacidad laboral del 55%, estructurada el 29 de julio de 2016, de origen común, conforme se observa a folios 30 a 35 del anexo 01 expediente digitalizado.

(III) Que la Junta Regional de Calificación de Antioquia, profirió dictamen el 21 de junio de 2020, por medio del cual asignó al actor un 70% de pérdida de capacidad laboral, de origen común, fijando como fecha de estructuración el 14 de febrero de 2018, consúltese el anexo 09 del expediente digital.

(IV) El demandante solicitó a Colpensiones el reconocimiento de la pensión de invalidez, prestación que le fue negada mediante Resolución GNR 300982 del

12 de octubre de 2016, determinación confirmada a través de las resoluciones GNR 356192 del 25 de noviembre de 2016 y VPB 1292 del 11 de enero de 2017, actos administrativos que militan a folios 34 a 42, 46 a 46 y 52 a 56, respectivamente, del anexo 01 expediente digitalizado.

2.3. PROBLEMAS JURIDICOS A RESOLVER

Deberá determinar la Sala

¿Si es procedente revocar la sentencia de primera instancia, para en su lugar acceder a las súplicas de la demanda, verificando para tal fin, (i) si, a partir de la historia clínica del demandante es posible modificar la fecha de estructuración del estado de invalidez determinada por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia, (ii) subsidiariamente, establecer si el señor Fermín Antonio Gómez Pabón, reúne los requisitos exigidos para ser beneficiario de la pensión de invalidez en aplicación del principio de la condición más beneficiosa, bajo los presupuesto del Acuerdo 049 de 1990?

2.4.- TESIS

Los problemas jurídicos planteados se resuelven bajo la tesis según la cual, (i) no es posible modificar la fecha de estructuración de la invalidez del demandante a partir del estudio de la historia clínica del actor, (ii) no se cumplen los requisitos del test de procedencia establecidos en la sentencia SU556 de 2019, para acceder a la prestación, bajo las reglas del Decreto 758 de 1990; en consecuencia, la sentencia debe ser CONFIRMADA.

2.4 PREMISAS NORMATIVAS

El artículo 38 de la Ley 100 de 1993 prescribe:

“Para los efectos del presente capítulo se considera inválida la persona que, por cualquier causa de origen no profesional, no provocada intencionalmente, hubiere perdido el 50% o más de su capacidad laboral”.

Por su parte, el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, con la modificación introducida por el 1° de la ley 860 de 2003, indica:

“Requisitos para obtener la pensión de invalidez. Tendrán derecho a la pensión de invalidez el afiliado al sistema que conforme a lo dispuesto en el artículo anterior sea declarado inválido y acredite las siguientes condiciones:

1. Invalidez causada por enfermedad: Que haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres (3) años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración”

2.5 DEL ESTADO DE INVALIDEZ

Conforme a la prueba recaudada en plenario, es claro que el señor Fermín Antonio Gómez Pabón, presenta una pérdida de capacidad laboral superior al 50%, siendo la fecha de estructuración de la misma el punto neural de debate, en tanto que Colpensiones en la calificación realizada el 21 de agosto de 2016, determinó como fecha de estructuración el 29 de julio de 2016, mientras que la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia, en la experticia realizada el 21 de junio de 2020, estableció como fecha de estructuración, el 14 de febrero de 2018, siendo claro, que con independencia de la fecha que se acoja, el pretensor no cumpliría con los requisitos para acceder a la pensión de vejez, en tanto que, la última cotización la efectuó para el ciclo junio de 1985, no satisfaciendo entonces las exigencias del artículo 39 de la Ley 100 de 1993, con la modificación de la Ley 860 de 2003.

Atendiendo las motivaciones del recurso de alzada, se tiene que el primer reproche que realiza la parte recurrente, gira en torno a la consideración de que

es posible modificar la fecha de estructuración de la invalidez del accionante, a partir del estudio de la historia clínica aportada, siendo enfática la defensa del pretensor en señalar que dicha estructuración es claramente determinable desde el año 1987.

Atendiendo a lo anterior, debe decirse que el artículo 41 de la Ley 100 de 1993, establece el procedimiento en sede administrativa para la calificación de pérdida de capacidad laboral, el origen de la misma y la fecha de estructuración, señalando los organismos competentes para realizar esta calificación, que lo son, en primera instancia, las EPS, las ARL, las aseguradoras que tienen a su cargo seguros previsionales de invalidez y en caso de inconformidad la Junta Regional de Calificación de Invalidez y en segunda instancia, con ocasión del recurso de apelación frente al dictamen de la Junta Regional de Invalidez, por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, siendo esta última el organismo de cierre.

Los dictámenes que profieren los organismos autorizados de acuerdo con el artículo 41 de la Ley 100 de 1993, pueden ser controvertidos por vía judicial, así lo establece el artículo 44 del Decreto 1352 del año 2013, que dispone lo siguiente:

“Controversias sobre los dictámenes de las Juntas de Calificación de Invalidez. Las controversias que se susciten en relación con los dictámenes emitidos en firme por las Juntas de Calificación de Invalidez, serán dirimidas por la justicia laboral ordinaria de conformidad con lo previsto en el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, mediante demanda promovida contra el dictamen de la junta correspondiente. Para efectos del proceso judicial, el Director Administrativo y Financiero representará a la junta como entidad privada del régimen de seguridad social integral, con personería jurídica, y autonomía técnica y científica en los dictámenes”.

Se deduce de la norma citada, que los dictámenes que se emiten en sede administrativa, no tienen carácter definitivo, en la medida en que el interesado, puede acudir a la jurisdicción ordinaria laboral, a efectos de controvertirlos.

La Corte Suprema de Justicia, frente a este punto y en relación con el valor probatorio que debe darse a los dictámenes emitidos por la Junta Regional y Junta Nacional de Calificación de Invalidez ha fijado, reglas uniformes, según las cuales, los dictámenes de las Juntas son un elemento probatorio más, que puede ser valorado por el Juez y por lo tanto, es dable que en sede judicial, el Juez se aparte de conclusiones que están contenidas en dictámenes emitidos por los organismos de la seguridad social competentes para ello, en el caso concreto la Junta Regional de calificación de Invalidez de Antioquía, ese criterio esta contenido, entre otros pronunciamientos, en las sentencias radicación SL29622 del 19 de octubre del 2006, SL 32617 del 23 de septiembre del año 2008, SL 35450 del 18 de septiembre del año 2012, SL 52072 del año 2014 y la sentencia SL 16374 del 4 de noviembre del año 2014.

Asimismo, en sentencia SL513 del 17 de febrero de 2021, se itera:

“La Corte, en providencia CSJ SL 2984-2020, en la cual memoró las sentencias CSJ SL3992-2019 y SL4571-2019 enseñó:

Para dar respuesta a los planteamientos de la recurrente, baste traer a colación lo explicado en sentencia SL3992-2019, así:

Esta sala de la Corte ha resaltado la importancia intrínseca que tienen esos dictámenes de pérdida de la capacidad laboral, por emanar de autoridades científico técnicas autorizadas por el legislador y por su deber de fundamentarse en la historia clínica, exámenes médicos y demás observaciones diagnósticas relativas al estado de salud del paciente. Por ello, ha dicho que, en principio, el juez del trabajo está obligado a observarlos y respetarlos, en el marco de sus facultades de valoración probatoria.

Sin embargo, al mismo tiempo, por la diversidad de factores que confluyen a la determinación de la realidad de la salud del paciente y la evolución de su capacidad laboral, la Sala ha determinado que dichos dictámenes no constituyen una prueba definitiva, incuestionable o inmodificable en el marco del proceso ordinario, ni muchos menos una prueba de carácter ad substantiam actus. Contrario a ello, ha destacado esta corporación, en múltiples oportunidades, que dichas experticias constituyen una prueba más del proceso que el juez puede valorar de manera libre, dentro del marco de sus facultades de libre valoración de la prueba y libre formación del convencimiento. (Ver CSJ SL, 18 mar. 2009, rad. 31062, CSJ SL, 18 sep. 2012, rad. 35450,

CSJ SL3090-2014, CSJ SL9184-2016, CSJ SL697-2019 y CSJ SL3380-2019).

Ahora, esta facultad judicial, no llega hasta reconocer competencias técnicas al Juez, quien para su decisión necesariamente tendrá que apoyarse en un dictamen pericial, así quedó precisado en la sentencia SL29622 del 19 de octubre del 2006 *«Reitera la Corte, entonces, su criterio ya decantado de que los jueces del trabajo y de la seguridad social sí tienen plena competencia y aptitud para examinar los hechos realmente demostrados que contextualizan la invalidez establecida por las juntas, a fin de resolver las controversias que los interesados formulen al respecto. Ello, por supuesto, no llega hasta reconocerle potestad al juez de dictaminar en forma definitiva, sin el apoyo de los conocedores de la materia, si el trabajador está realmente incapacitado o no y cuál es la etiología de su mal, como tampoco cuál es el grado de la invalidez, ni la distribución porcentual de las discapacidades y minusvalías.»*

De ahí que la decisión del problema jurídico necesariamente conduce a que el fallador acoja el dictamen que mayor convencimiento le genera, siendo claro que en el caso concreto no existe ningún medio técnico que ubique la estructuración de la invalidez del actor en el año 1987, sin que sea posible que el Juez o esta Sala de Decisión, modifique la estructuración de la invalidez a partir del análisis de la historia clínica del señor Fermín Antonio Gómez Pabón, pues, pese a que en dicha historia clínica sí se evidencia que el 1º de agosto de 1987 el gestor del proceso sufrió una caída, ello no resulta suficiente, para concluir que a raíz de la misma y de las secuelas que produjo el incidente, se estructura la pérdida de capacidad laboral y muchos menos en un porcentaje superior al 50%, pues ello desborda la competencia del fallador, iterando que no puede ser el Juez quien establezca en forma definitiva el porcentaje de invalidez, ni la fecha de estructuración, ello con independencia al conocimiento que pueda tener del Manual Único de Calificación de Invalidez.

Aunado a lo anterior, no podría escindirse las calificaciones realizadas por Colpensiones y por la Junta Regional, para concluir, que ese porcentaje de

pérdida de capacidad laboral que no se discute es superior al 50%, ya se encontraba configurado para el año 1987.

Pues bien, otro de los motivos de inconformidad planteados por la activa, lo es la negativa del Juzgado en decretar la prueba testimonial solicitada desde el escrito de demanda, frente a lo cual es relevante tener en cuenta que conforme se expuso en el líbelo introductor y como lo planteó el apoderado en la audiencia celebrada el 14 de febrero de 2020, dicha prueba se solicitó con la finalidad de establecer la fecha en que el demandante perdió su capacidad laboral en forma permanente, no obstante, a juicio de la Sala, la misma no resultaba conducente, en tanto que no se trataba de testimonios técnicos y en tal sentido, tampoco podría la judicatura, a partir de los dichos de los declarantes, modificar la fecha de estructuración de la invalidez del señor Gómez Pabón, pues se reitera dicha determinación debe estar amparada en una prueba de carácter técnico-científico.

En igual sentido, y en relación con las irregularidades en el trámite de contradicción del dictamen proferido por la Junta Regional de Invalidez de Antioquia, se precisa, que, la a quo dio traslado del dictamen en providencia del 06 de mayo de 2022, con base en el artículo 228 del Código General del Proceso y la única solicitud de aclaración que obra en el expediente de la alzada data del 11 de julio de 2022, sin que se acredite que, en efecto, como lo argumenta la parte activa, hubo una solicitud anterior, en tanto la misma no obra en el proceso, resultando extemporánea tal petición.

De ahí que, aunque la a quo debió pronunciarse sobre la aludida solicitud, tal situación no genera ninguna consecuencia para la validez del trámite en tanto, se reitera, la petición fue presentada por fuera de la oportunidad procesal.

Aplicación del principio de condición más beneficiosa

La Corte Suprema de Justicia, a partir de la sentencia SL 38674 del 25 de julio de 2012, MP Carlos Ernesto Molina Monsalve, al realizar el análisis de la aplicación

de la condición más beneficiosa, cuando se presenta tránsito legislativo entre la Ley 100 de 1993 y Las leyes 797 y 860 de 2003, sostuvo su procedencia:

“B. CONDICIÓN MÁS BENEFICIOSA EN EL TRÁNSITO LEGISLATIVO ENTRE LEY 100 DE 1993 Y DISPOSICIONES LEGALES POSTERIORES.

Sin embargo, dada la nueva composición de la Sala, se considera pertinente reexaminar el tema, sobre la inaplicabilidad de la condición más beneficiosa para dirimir los conflictos cuando la invalidez ocurre en vigencia del artículo 1° de la Ley 860 de 2003, y el afiliado, al momento de su entrada en vigencia, cumple con el requisito de las 26 semanas de cotización que consagraba el modificado artículo 39 de la citada Ley 100 de 1993, para estimar que en estos casos sí procede dicho principio legal y constitucional en la sucesión de esos dos ordenamientos, por lo siguiente: “

Posteriormente, mediante sentencia SL 4650 de 2017, con ponencia de los magistrados Fernando Castillo Cadena y Gerardo Botero Zuluaga, fija la Corte una nueva línea de pensamiento de la Corporación, respecto de la aplicación temporal del principio de la condición más beneficiosa, señalando:

*“Entonces, algo debe quedar muy claro. Solo es posible que la Ley 797 de 2003 difiera sus efectos jurídicos **hasta el 29 de enero de 2006**, exclusivamente para las personas con una expectativa legítima. Con estribo en ello se garantiza y protege, de forma interina pero suficiente, la cobertura al sistema general de seguridad social frente a la contingencia de la muerte, bajo la égida de la condición más beneficiosa. Después de allí no sería viable su aplicación, pues este principio no puede convertirse en un obstáculo de cambio normativo y de adecuación de los preceptos a una realidad social y económica diferente, toda vez que es de la esencia del sistema el ser dinámico, jamás estático. Expresado en otro giro, durante dicho periodo (29 de enero de 2003 – 29 de enero de 2006), el artículo 46 de la Ley 100 de 1993 continúa produciendo sus efectos con venero en el principio de la condición más beneficiosa para las personas con expectativa legítima, ulterior a ese día opera, en estrictez, el relevo normativo y cesan los efectos de este postulado constitucional. No puede la Corte pasar por alto que esta franja de tres años, a más de tornarse razonable y proporcional favorece, a quienes tenían dicha situación concreta al momento del tránsito legislativo”.*

En el caso del señor Fermín Antonio Gómez Pabón, la invalidez no está estructurada dentro de los tres años establecidos por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, para la aplicación del principio de la condición más beneficiosa de la Ley 860 de 2003, respecto de la normatividad inmediatamente anterior, Ley 100 de 1993, no admitiendo la Corte, la posibilidad de la aplicación de este principio, con relación a normatividades que no corresponden a la inmediatamente anterior, línea jurisprudencial integrada, entre otras, por las sentencias CSJ SL 838 de 2013 y CSJ SL 7942 de 2014.

Aplicación de la sentencia SU 556 de 2019

Para la Sala, tal y como lo reclama la parte actora, resulta procedente abordar el estudio de la aplicación del principio constitucional de la condición más beneficiosa, en pensiones de invalidez, conforme a la sentencia SU556 de 2019, proferida por la Sala Plena de la Corte Constitucional, en la cual se reafirma la admisión de la posibilidad de acudir a normas que no son la inmediatamente anterior, para resolver el derecho pensional de aquellos, cuya invalidez se estructura en vigencia de la Ley 860 de 2003, como lo es, el Decreto 758 de 1990, tal y como fue sentado en la sentencia SU442 de 2016, en tanto, es indiscutible, que estamos frente a un derecho de carácter fundamental para personas que por presentar una disminución de sus capacidades físicas, mentales o sensoriales, no pueden garantizarse su propia subsistencia y a quienes los artículos 13, 47 y 54 de la Carta política, los hace titulares de una especial protección por parte del Estado.

En igual sentido, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia de tutela STC 7217 de 2017, también adoptó el criterio expuesto por la Corte Constitucional, para resolver acción de tutela interpuesta contra la Sala Laboral de la misma Corporación, con ocasión de la aplicación del principio de la condición más beneficiosa, únicamente respecto a la legislación inmediatamente anterior, en los siguientes términos:

... “2.3. Así las cosas, al presentarse un conflicto de regímenes laborales para la aplicación de la condición más beneficiosa como extensión del principio de favorabilidad, esta Sala comparte el criterio del Tribunal constitucional al afirmar que la aplicación de dicho postulado “(...) no se limita en el tiempo a la norma inmediatamente anterior a la vigente al momento de causación de la pensión de sobrevivientes, esto es, el régimen legal vigente al momento de la muerte del causante...”

En este contexto, es que considera procedente la Sala, abordar el estudio del derecho deprecado, conforme a los requisitos del decreto 758 de 1990, ello por cuanto es claro, que el accionante, tampoco acredita los requisitos exigidos por la Ley 100 de 1993.

Cumplimiento de los requisitos para la aplicación del principio de la condición más beneficiosa

Con base en la historia laboral obrante a folios 54-56, el asegurado, hoy fallecido, presenta la siguiente densidad de cotizaciones:

CONCEPTO	SEMANAS ACREDITADAS
Ley 860 del 2003	El actor cuenta con 0 semanas cotizadas, en los 3 años anteriores a la estructuración de la invalidez.
Ley 100 de 1993	Para la entrada en vigencia de la ley 860 de 2003, 26 de diciembre de 2003, el actor se encontraba inactivo y acredita 0 semanas en el año anterior a la vigencia de la ley
Decreto 758 de 1990	Semanas al 1º de abril de 1994, fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, 371,57 Semanas en los 6 años anteriores a la entrada en vigencia de la Ley 860 del 2003, es decir, del 26 de diciembre de 1997 al 26 de diciembre del 2003, 0 semanas Semanas en los 6 años anteriores a la estructuración del estado de invalidez, es decir, del 14 de febrero de 2018 al 14 de febrero del 2012, 0 semanas

Así las cosas, el actor cumple con las 300 semanas exigidas con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, esto es, al 1º de abril de 1994, y

obviamente para la fecha de estructuración de la invalidez, por lo que es procedente reconocer la pensión de invalidez en aplicación del principio de la condición más beneficiosa.

Dilucidado lo anterior, es menester determinar, si el pretensor satisface los requisitos establecidos por la Corte Constitucional en la multicitada sentencia SU 556 de 2019, que permita inaplicar las reglas ya indicadas, establecidas por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, y en su lugar, dar aplicación ultractiva a las disposiciones del Acuerdo 049 de 1990.

CONDICIONES	ANALISIS DEL CASO CONCRETO	CUMPLE/ NO CUMPLE
Acreditarse que el accionante, además de ser una persona en situación de invalidez, pertenece a un grupo de especial protección constitucional o se encuentra en una situación de riesgo derivada de, entre otras, alguna de las siguientes condiciones: (i)analfabetismo, (ii) vejez, (iii) pobreza extrema, (iv) cabeza de familia, (v) desplazamiento o (vi) padecimiento de una enfermedad crónica, catastrófica, congénita o degenerativa.	El demandante cuenta con 66 años de edad, no se acreditó que fuera analfabeta, que se encuentre en pobreza extrema, que sea cabeza de familia, ni desplazado, adicionalmente, pese a lo sostenido por el apoderado recurrente, no se acredita que padezca enfermedad crónica, catastrófica, congénita o degenerativa, pues en el dictamen de la Junta Regional, se establece que esta categorías no aplican.	No cumple.
Debe poder inferirse razonablemente que la carencia del reconocimiento de la pensión de invalidez afecta directamente la satisfacción de las necesidades básicas del accionante, esto es, su mínimo vital y, en consecuencia, una vida en	No se acreditaron las condiciones de vida del accionante.	No cumple

condiciones dignas.		
Deben valorarse como razonables los argumentos que proponga el accionante para justificar su imposibilidad de haber cotizado las semanas previstas por las disposiciones vigentes al momento de la estructuración de la invalidez	Si bien el apoderado del actor refiere que fue a raíz del accidente que padeció el actor en 1987 que este se vio imposibilitado para continuar cotizando, dicha afirmación no cuenta con respaldo probatorio, encontrando que para la fecha en que el actor sufrió la caída 1° de agosto de 1987 ya había cesado en el pago de los aportes, siendo el ultimo aporte realizado el correspondiente a junio de 1985, es decir, que llevaba 2 años y 2 meses sin efectuar cotizaciones al momento del evento.	No cumple
Debe comprobarse una actuación diligente para solicitar el reconocimiento de la pensión de invalidez	El demandante fue calificado por medicina laboral de Colpensiones el 21 de agosto de 2016, solicitando el reconocimiento de la pensión el 9 de septiembre de 2016.	Si cumple

Así las cosas, no le asiste el derecho al demandante al reconocimiento de la pensión de invalidez, por el no cumplimiento del test de procedencia establecido por la Corte Constitucional en la Sentencia SU 556 de 2019, razón por la cual se impone la confirmación del fallo de primera instancia.

Finalmente se precisa que la decisión absolutoria no deriva de la negativa del Juzgado cognoscente al decreto y práctica de la prueba testimonial, pues se reitera, la prueba solicitada, lo fue con unos fines distintos a los que se pretende en esta oportunidad y el auto que deniega la misma adquirió firmeza al no interponerse el recurso de apelación.

Ahora, si bien a esta instancia se allegó declaración extraproceso de los señores Gloria Cecilia Gómez Pabón y Jorge Enrique Álvarez Sánchez, así como certificación de la clasificación del Sisben en el grupo C4 población vulnerable, tal documental no puede ser considerada porque se aporta por fuera de la oportunidad procesal y con ella se sorprende a la parte accionada, recordando que conforme al artículo 83 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad

Social “ *Las partes **no podrán** solicitar del Tribunal la práctica de pruebas no pedidas ni decretadas en primera instancia. Cuando en la primera instancia y sin culpa de la parte interesada se hubieren dejado de practicar pruebas que fueron decretadas, podrá el tribunal, a petición de parte, ordenar su práctica y la de las demás pruebas que considere necesarias para resolver la apelación o la consulta.*”

Los presupuestos normativos del citado artículo 83 no se cumplen en el caso bajo examen, dado que la prueba no fue decretada en primera instancia, sin que las facultades oficiosas en están puedan estar dirigidas a suplir las falencias probatorias del proceso.

Se abstendrá la Sala de imponer condena en costas al accionante, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 8° del artículo 365 del Código General del Proceso.

En consonancia con lo expuesto, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley

FALLA:


1.- Se **CONFIRMA** la Sentencia proferida por el Juzgado Quince Laboral del Circuito de Medellín, en audiencia celebrada el día diez (10) de octubre de dos mil veintidós (2022) dentro del proceso ordinario laboral instaurado por el señor FERMIN ANTONIO GÓMEZ PABÓN en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES.

2.- Sin **COSTAS** en esta instancia.

3.- Se ordena la devolución del expediente y el audio al Juzgado de origen.


El fallo anterior será notificado a las partes por Edicto de conformidad con el numeral 3° literal d) del artículo 41 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social y el auto AL2550 del 23 de junio de 2021, proferido por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

Los Magistrados,



SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE

CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES



VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO